

Los desafíos actuales y las perspectivas organizativas y comunitarias para el movimiento popular a 20 años de la APPO

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 20 de junio de 2026

A veinte años de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Oaxaca continúa siendo un laboratorio político fundamental para comprender las disputas contemporáneas entre democracia, extractivismo, criminalidad organizada y acción colectiva. Los movimientos sociales han demostrado una notable capacidad de resistencia y reinención; sin embargo, hoy enfrentan escenarios más complejos y sofisticados que los observados en 2006. La defensa de los territorios, los derechos colectivos, la autonomía comunitaria, la igualdad sustantiva y la democratización profunda del Estado seguirá siendo uno de los principales campos de disputa en las próximas décadas.

La irrupción de la APPO en 2006 representó uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea de México. No solo expresó el conflicto entre el magisterio democrático y el gobierno estatal, sino que articuló múltiples agravios acumulados: exclusión política, racismo estructural, pobreza, autoritarismo, saqueo de bienes comunes y ausencia de mecanismos democráticos efectivos. La respuesta estatal combinó represión policial, persecución judicial, asesinatos, campañas mediáticas y mecanismos de división interna.

Desde entonces, México ha transitado por distintos ciclos políticos. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón predominó una lógica de seguridad nacional que fortaleció la militarización, la derechización de la vida pública y la criminalización de la protesta social. Asimismo, se profundizó la crisis de desaparición forzada en el marco de la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Con Enrique Peña Nieto se consolidó una estrategia basada en reformas estructurales orientadas a fortalecer un modelo de capitalismo extractivo y a profundizar los mecanismos de control social. La reforma educativa impactó directamente al movimiento magisterial, especialmente a la CNTE y a la Sección XXII.

Con Andrés Manuel López Obrador se abrió un escenario más complejo. Emergieron tensiones en torno a megaproyectos, políticas energéticas, territorios

indígenas y procesos de consulta cuestionados por diversos sectores sociales. Actualmente, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, persiste el desafío de compatibilizar un proyecto de transformación institucional con crecientes disputas territoriales, ambientales, de seguridad y de derechos humanos.

En estos veinte años hemos observado el desgaste de los partidos tradicionales, el retorno y posterior crisis del PRI, así como la llegada de MORENA al gobierno federal. Sin embargo, más allá de las alternancias partidistas, los distintos gobiernos han mantenido diversas formas de relación con la protesta social: mecanismos de control corporativo, negociación selectiva, cooptación, judicialización, criminalización e incluso violencia directa contra actores sociales.

En Oaxaca, la transición política ha transitado de los gobiernos de José Murat y Ulises Ruiz —este último convertido en un símbolo nacional del autoritarismo estatal— a los de Gabino Cué, Alejandro Murat y, actualmente, Salomón Jara. A pesar del cambio de fuerzas políticas en el poder, persisten dinámicas vinculadas a modelos de desarrollo extractivistas y de despojo que continúan generando conflictos con pueblos y comunidades.

Uno de los fenómenos más significativos de las últimas dos décadas ha sido la expansión y diversificación del crimen organizado. Este ya no opera únicamente mediante economías ilícitas tradicionales, sino también a través del control territorial, la extracción de rentas, la infiltración institucional y la captura de gobiernos locales. La convergencia entre economías legales e ilegales genera escenarios particularmente complejos para comunidades indígenas, defensores del territorio y movimientos populares.

Al mismo tiempo, el extractivismo contemporáneo no se limita a la minería. Incluye megaproyectos energéticos, corredores industriales, infraestructura logística, turismo intensivo, apropiación de biodiversidad, plataformas digitales y nuevas formas de acumulación territorial. Las comunidades indígenas y campesinas ocupan una posición estratégica porque resguardan territorios fundamentales para estos procesos, lo que explica el incremento de conflictos socioambientales en diversas regiones.

Los procesos recientes en países como Chile y Argentina ofrecen lecciones relevantes para México. En ambos casos se observaron ciclos de malestar social profundo, acompañados por respuestas institucionales insuficientes, polarización política y fortalecimiento de discursos conservadores. El desafío consiste en

construir gobernabilidad democrática sin recurrir a la militarización, garantizando derechos colectivos y enfrentando la captura criminal de territorios.

Ante este escenario, desde los pueblos observamos con desilusión y escepticismo al sistema de partidos políticos. Consideramos que la disputa por los cargos públicos ha desplazado, con frecuencia, la atención a los problemas estructurales que afectan a las mayorías. Por ello, la organización autónoma de las comunidades continúa siendo una alternativa indispensable para la defensa de los derechos colectivos y la construcción de transformaciones profundas.

Los movimientos sociales enfrentan hoy el desafío de redefinir su identidad, su papel y su agenda frente al poder político actual. Se requiere avanzar de la protesta aislada hacia la construcción de articulaciones amplias capaces de incidir en la vida pública. En un entorno marcado por la polarización, la violencia y la crisis de representación, el movimiento social oaxaqueño se encuentra obligado a reconfigurar sus estrategias frente a viejos y nuevos mecanismos de dominación.

Como Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social en Oaxaca, compartimos algunos de los principales retos que identificamos a veinte años de la insurrección popular de la APPO:

1. Desafíos políticos.

- **Relación con el Estado.** Mantener la autonomía crítica frente al Estado y evitar procesos de cooptación o estigmatización.
- **Crisis de representatividad.** Superar la crisis de representatividad que existe entre las demandas sociales y las estructuras organizativas tradicionales.
- **Criminalización de Protesta Social.** Enfrentar la criminalización de la protesta y la descalificación de activistas, colectivos de búsqueda y personas defensoras de derechos humanos.

2. Contexto de violencia e inseguridad.

- **Riesgo y desprotección.** Organizarse en un entorno atravesado por la violencia criminal y la impunidad.
- **Militarización.** Resistir los efectos de la militarización de tareas civiles.
- **Desaparición Forzada.** Mantener visibles las demandas de verdad y justicia

frente a la crisis de desapariciones.

3. Dinámicas organizativas.

- **Articulación y fragmentación.** Construir articulaciones entre movimientos feministas, ambientalistas, indígenas, comunitarios y de las diversidades sexogenéricas.
- **Brecha generacional y ciberactivismo.** Fortalecer la participación de las juventudes y transformar la movilización digital en procesos organizativos duraderos.
- **Coyunturas Internacionales.** Aprovechar coyunturas internacionales para visibilizar demandas sociales y fortalecer la solidaridad entre pueblos.

4. Nuevas formas de organización social.

Movimiento de Mujeres y Feminista. Reconocer el aporte del movimiento feministas en términos de exigencias y de movilización.

Jóvenes. Hoy en día las juventudes han impulsado diversas formas de organización y poniendo otra dinámica a los movimientos sociales.

Diálogos intergeneracionales e intermovimientos en diversas latitudes y tiempos con los pueblos y comunidades originarias

5. Procesos comunicacionales.

- **Construir narrativas contrahegemónicas.**
- **Utilizar estratégicamente las redes sociales** para difundir posiciones y propuestas.
- **Incorporar expresiones artísticas y culturales** que fortalezcan nuevas formas de comunicación política y nuevas narrativas.

Los movimientos sociales enfrentarán una disputa de largo plazo entre modelos extractivos y proyectos centrados en la defensa de la vida, los territorios y los bienes comunes. La tarea estratégica consiste en fortalecer la autonomía organizativa, construir poder popular desde abajo, profundizar las prácticas democráticas comunitarias, enfrentar las violencias patriarcales, resistir el despojo territorial y elaborar alternativas económicas centradas en la reproducción de la vida y no en la acumulación de capital.

La memoria de la APPO no debe entenderse únicamente como una conmemoración histórica. Constituye una herramienta política para pensar las luchas del presente y los desafíos de un futuro marcado por la disputa entre proyectos de vida digna y las nuevas formas de dominación del capitalismo contemporáneo.

Asamblea Por la Reconstitución del movimiento social en Oaxaca